

baización de la calle Río Eo, de Lugo, no entrando este Ministerio por tanto a conocer del fondo del mismo, debiendo el Ayuntamiento de Lugo delimitar el polígono o unidad de actuación y señalar el sistema de actuación, de acuerdo con los artículos 118 y 119 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1978.

2. Argentoná (Barcelona).—Recurso de reposición interpuesto por don Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de don Jorge Vendrell Salvia, contra la resolución de este Ministerio de 18 de septiembre de 1978, declaratoria de la inadmisibilidad por extemporáneo, del recurso de alzada deducido contra acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona de 26 de mayo de 1977, denegatoria de la aprobación de modificación del plan Plan General de Ordenación de Argentoná, sector Serrá Lladó y del plan parcial del mismo nombre; se acordó:

Primero.—Estimar en parte el recurso de reposición de don Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de don Jorge Vendrell Salvia, revocando la Orden ministerial de 18 de septiembre de 1978 en lo referente a la admisibilidad del recurso de alzada.

Segundo.—Desestimar el recurso de reposición de don Alfonso Blanco Fernández en cuanto a las cuestiones de fondo planteadas en el mismo, y por consiguiente confirmar los acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona de 26 de mayo de 1977, denegatorios de la aprobación de modificación del Plan General de Ordenación de Argentoná, sector Serrá Lladó, y del plan parcial del mismo nombre.

3. Murcia.—Recurso de reposición formulado por don José Gómez Gómez en nombre propio y en el de sus hermanas Hortensia, María y Mercedes contra la Orden ministerial de 27 de diciembre de 1977, aprobatoria del Plan General de Murcia y Ordenanzas Municipales.

Se acordó estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por don José Gómez Gómez en nombre propio y en el de sus hermanas Hortensia, María y Mercedes contra la Orden ministerial de 27 de diciembre de 1977, aprobatoria del Plan General de Murcia y Ordenanzas Municipales, y modificar la resolución impugnada en el sentido de calificar la finca como zona II, permitiendo la edificación en el margen del camino al que recae con arreglo a la norma 11.4 «Edificación Alineada».

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Suelo, significando que contra estas resoluciones, que se transcriben definitivas en vía administrativa, cabe contra la número 1 la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de esta publicación. También cabe, con carácter potestativo y previo al contencioso-administrativo, la interposición del recurso de reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde el día siguiente al de esta publicación, en cuyo supuesto, el recurso contencioso-administrativo habrá de interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición, y contra las números 2 y 3 cabe la interposición del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 1 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

## 19958

*ORDEN de 30 de junio de 1979 por la que se resuelven asuntos de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1978, y en los Reales Decretos 754/1978, de 14 de abril; 930/1979, de 29 de abril, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, con indicación de la resolución recaída en cada caso.*

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido de 9 de abril de 1978, y en los Reales Decretos 754/1978, de 14 de abril; 930/1979, de 29 de abril, y Orden ministerial de 9 de agosto de 1977, se resuelven los asuntos que se indican:

1. Valencia.—Documentación complementaria y rectificadora del plan comarcal de ordenación urbana «Ribera Baixa» (Valencia), presentada por la Diputación Provincial de Valencia en cumplimiento de la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1978, por la que se acordó suspender la aprobación definitiva del plan comarcal precitado al objeto de que se subsanaran determinadas deficiencias.

Se acordó la aprobación definitiva del plan comarcal reseñado, por haberse cumplimentado lo prevenido en la Orden ministerial de 16 de diciembre de 1978.

2. Bilbao.—Documentación rectificadora de la nueva Ordenanza de las Zonas Rural y Libre permanente del plan comarcal de Bilbao, presentada por la Corporación Administrativa «Gran Bilbao», en cumplimiento de la Orden ministerial de 9 de enero de 1979.

Se acordó la aprobación definitiva de la Ordenanza precitada, por haberse cumplimentado las obligaciones impuestas por la Orden ministerial de 9 de enero de 1979.

Lo que se publica en este «Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Suelo, significando que contra estas resoluciones que se transcriben definitivas en vía administrativa, cabe contra las números 1 y 2 la interposición del recurso de reposición ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de esta publicación y en su día el contencioso administrativo, que habrá de interponerse ante la Audiencia Territorial en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso, o si no lo fuere, en el plazo de un año a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 30 de junio de 1979.—P. D., el Subsecretario de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Juan Díez Nicolás.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.

## 19959

*RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la concesión otorgada a don José Villalba Fernández de un aprovechamiento de aguas subálveas del arroyo de Benagalbón, en término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), con destino a riegos.*

Don José Villalba Fernández ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas subálveas del arroyo de Benagalbón, en término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), con destino a riegos, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a don José Villalba Fernández autorización para aprovechar un caudal de 4,6 litros por segundo, durante seis horas al día, equivalente a un caudal continuo de 1,5 litros por segundo, con un máximo de 94,533 metros cúbicos al día, de aguas subálveas captadas del arroyo Benagalbón, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), con destino al riego de una finca de su propiedad de 1,20 hectáreas de extensión, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente y que por esta Resolución se aprueba, a los efectos de la concesión, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Pedro Graciani Brazal, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, y cuyo importe de ejecución material es de 329.077,44 pesetas.

La Comisaría de Aguas del Sur de España podrá autorizar pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la autorización en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas en el día seis meses a partir de la misma fecha.

Tercera.—La Administración no responde del caudal que se concede y podrá obligar al concesionario a la instalación, a su costa, de los dispositivos de control o limitación de caudal que estime necesario, a cuyo efecto se fija en seis horas el tiempo de funcionamiento de la instalación, debiendo el interesado ajustar la potencia de la maquinaria de elevación a la precisa para elevar 4,6 litros por segundo durante aquella jornada, potencia que deberá constar en el acta de reconocimiento final.

La Comisaría de Aguas del Sur de España comprobará especialmente que el volumen utilizado por el concesionario no exceda, en ningún caso, del que se autoriza.

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como en el periodo de explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Sur de España, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta acta la Dirección General.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a la tierra, quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo con independencia de aquella.

Séptima.—La Administración se reserva el derecho de tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios

para toda clase de obras públicas; en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

Octava.—Esta concesión se otorga por un periodo de noventa y nueve años, contado a partir de la fecha de levantamiento del acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Novena.—Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con motivo de las obras de regulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Diez.—Cuando los terrenos que se pretenden regar queden dominados en su día por algún canal construido por el Estado, quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aquéllos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas normas económico-administrativas que se dicten con carácter general.

Once.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social, y demás de carácter laboral, administrativo o fiscal.

Doce.—El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación, las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.

Trece.—Caducará esta concesión por incumplimiento de estas condiciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose aquélla según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 2 de julio de 1979.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

19960

*RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la autorización para ejecutar labores de alumbramiento de aguas subterráneas en el barranco de la Negra, en el término municipal de Alajeró (isla de Gomera), Tenerife, a favor del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).*

El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) ha solicitado autorización para ejecutar obras de alumbramiento de aguas subterráneas en terrenos de dominio público del cauce del barranco de la Negra, en término municipal de Alajeró, isla de Gomera (Tenerife), y

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) para realizar obras de alumbramiento de aguas subterráneas en terrenos de dominio público del cauce del barranco de la Negra, en término municipal de Alajeró, isla de Gomera (Tenerife), mediante un pozo que se emplazará a la cota 180 metros sobre el nivel del mar, que no deberá sobrepasar la profundidad de los citados 180 metros, es decir, la cota del agua en bajamar, con sujeción a las siguientes condiciones:

Primera.—Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el Ingeniero de Minas don Tomás Cologan Ponte y por el Ingeniero Agrónomo don José Ramón Angoloti, en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 1977, con un presupuesto total de ejecución material de 3.583.994 pesetas, en tanto no se oponga a las presentes autorización y condiciones, quedando autorizado el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife para introducir o aprobar las modificaciones de detalle que tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no afecten a las características esenciales de la autorización.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de cuatro meses y terminarán en el de tres años, contados ambos plazos a partir de la fecha de publicación de esta autorización en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—La inspección y vigilancia de las obras, tanto durante la construcción como de su explotación, estarán a cargo del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, y sus gastos, con arreglo a las disposiciones que le sean aplicables en cada momento, y, en especial, al Decreto número 140/1960, de 4 de febrero, serán de cuenta del concesionario, el cual viene obligado a dar cuenta al expresado Servicio Hidráulico del principio y fin de dichas obras, así como de cuantas incidencias ocurran durante la ejecución, explotación y conservación de la misma. Terminadas estas obras, se procederá a su reconocimiento, levantándose acta en la que conste el caudal alumbrado, el cumplimiento de las condiciones impuestas y de las disposiciones en vigor que le sean aplicables, debiendo ser aprobada dicha acta por la superioridad.

Cuarta.—Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos principios de la construcción. Los productos de las excavaciones serán depositados in situ y forma que no perturben los regímenes y cauces de las aguas ni perjudiquen los intereses de particulares, y el concesionario, bajo su responsabilidad, adoptará las precauciones necesarias para la seguridad de las obras y para evitar accidentes a los trabajadores.

Quinta.—Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, siendo responsable el concesionario de los daños y perjuicios que con motivo de las obras o servicios puedan irrogarse, tanto durante su construcción como de su explotación, y quedando obligado a ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

Sexta.—Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio público que para la ejecución de las obras considere necesario el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, el cual indicará el lugar más conveniente.

Séptima.—Queda sometida esta autorización a las disposiciones en vigor relativas a la protección a la industria nacional, legislación social y a cuanta de carácter fiscal y administrativo rijan actualmente o que se dicten en lo sucesivo y que le sean aplicables, como a las prescripciones contenidas en el Reglamento de Policía Minera para la seguridad de los obreros y de los trabajos, y a los artículos 22 y 100 del Reglamento de Armas y Explosivos, en cuanto puedan modificar aquél.

Octava.—El concesionario queda obligado a remitir anualmente al Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife el resultado de dos aforos, realizados de la misma forma por un técnico competente en épocas de máximo y mínimo caudal, los cuales podrá comprobar dicho Servicio Hidráulico, si lo estimase necesario, siendo los gastos derivados a costa del concesionario.

Novena.—El Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife podrá intervenir en la ordenación de los trabajos, señalando el ritmo con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la suspensión temporal de los mismos, si así conviniese, para determinar la influencia que éstos y otros que se realicen en la zona puedan tener entre sí.

Diez.—El concesionario no podrá hacer cesión de la autorización concedida a un tercero, salvo que, previo el trámite reglamentario, sea aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.

Once.—El concesionario queda obligado a dar cuenta a la Jefatura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de la aparición de gases méfíticos en las labores a fin de poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesarias aprobación de dicha Jefatura las instalaciones mecánicas de perforación, ventilación y seguridad que sean necesarias para la ejecución de las obras, debiendo nombrar a un facultativo legalmente autorizado por la Dirección Técnica de los trabajos.

Doce.—Para la implantación de tarifas de venta de agua será necesaria la aprobación del expediente correspondiente por la autoridad competente.

Trece.—Las aguas sólo podrán utilizarse para riegos. Si quisieran dedicarse a usos industriales o de abastecimiento, será necesario que se solicite autorización para ello, debiendo presentarse en el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, en su caso, certificados correspondientes de la potabilidad de las aguas desde el punto de vista químico y bacteriológico.

Catorce.—La Administración se reserva el derecho a tomar del alumbramiento los volúmenes de aguas necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de la concesión.

Quince.—El concesionario habrá de abonar en concepto de canon por ocupación de terrenos de dominio público, a tenor de lo preceptuado en el Decreto número 134/1960, de 4 de febrero, el importe anual que resulte de aplicar a la superficie ocupada el 4 por 100 del valor de la misma, deducido de acuerdo con el precio unitario correspondiente a los terrenos de la zona, justificado de modo fehaciente, canon que podrá ser objeto de revisión, de acuerdo con lo que en dicho Decreto se establece.

Dieciséis.—Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de las preinsertas condiciones y autorización, así como en los demás casos previstos por las disposiciones vigentes, procediéndose en tal caso con arreglo a los trámites señalados en la Ley General de Obras Públicas y Reglamento para su ejecución.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Madrid, 3 de julio de 1979.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, José María Gil Egea.

## MINISTERIO DE EDUCACION

19961

*ORDEN de 23 de mayo de 1979 por la que se concede al Centro no estatal de Formación Profesional «Arce», de Bilbao (Vizcaya), el primero y segundo grado libre.*

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por el Director del Centro no estatal de Formación Profesional «ARCE», de Bilbao, (Vizcaya), para que se clasifique como de 2.º grado libre y se le autoricen enseñanzas de este nivel con carácter provisional;